

Expediente: 1117/22
Carátula: CREDIL S.R.L. C/ DIAZ HUGO SERGIO S/ COBRO EJECUTIVO

Unidad Judicial: OFICINA DE GESTIÓN ASOCIADA EN DOCUMENTOS Y LOCACIONES N° 1

Tipo Actuación: SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS

Fecha Depósito: 01/10/2025 - 00:00

Notificación depositada en el/los domicilio/s digital/es:

90000000000 - DIAZ, HUGO SERGIO-DEMANDADO

20202850252 - CHEHIN, JORGE-POR DERECHO PROPIO

20202850252 - CREDIL S.R.L., -ACTOR

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

CENTRO JUDICIAL CAPITAL

Oficina de Gestión Asociada en Documentos y Locaciones N° 1

ACTUACIONES N°: 1117/22



H106018731027

JUICIO: CREDIL S.R.L. c/ DIAZ HUGO SERGIO s/ COBRO EJECUTIVO.- EXPTE. N° 1117/22.-

Juzgado Civil en Documentos y Locaciones I

San Miguel de Tucumán, 30 de septiembre de 2025.

Y VISTOS: para resolver los presentes autos de los cuales;

RESULTA

En fecha 01 de septiembre de 2025 se presenta el letrado Jorge Chein en el carácter de apoderado de CREDIL S.R.L y formula recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la providencia de fecha 26 de agosto del corriente año en cuanto dispuso "1) De las constancias de autos surge que el solicitante percibió la totalidad del monto condenado en la sentencia de fecha 15/06/2023 (\$71.460) con la orden de pago de fecha 21/09/2023. No pudiendo imputarse a la parte demandada la demora en la confección de la planilla por parte del solicitante -conforme el principio de buena fe procesal-; se observa la misma, debiendo practicarse una nueva liquidación desde la fecha de mora hasta la fecha 21/09/2023. 2) En cumplimiento con lo normado por el art. 609 del CPCyC, por Secretaría practíquese planilla fiscal a cargo del condenado en costas. Cumplido, vuelvan los autos a proveer lo peticionado en relación a la planilla de actualización honorarios presentada.

Al fundar su recurso, afirma que el decreto impugnado atribuye erróneamente la mora en la confección de la planilla a su parte, cuando en realidad es la parte demandada quien se encuentra en situación de incumplimiento. Ello es así ya que pese a estar notificado, el Sr. Hugo Sergio Díaz

no se apersonó al proceso para ejercer su derecho a la defensa ni para dar en pago las sumas depositadas por embargo, ni para cuestionar la sentencia o presentar planilla. De allí que según afirma, la falta de buena fe procesal sería atribuible al accionado y no al actor que fue obligado a iniciar este proceso por la falta de pago. Dice que en todo caso es a la deudora, principal interesada en desobligarse, quien a quien se le puede imputar mora. Afirma que tampoco se pueden vulnerar los derechos de su parte cuando la suscripta nunca ordenó mandar a confeccionar planilla ni puso un plazo determinado para ello. Entiende que otra opción es que la propia sentencia directamente indique el monto actualizado a la fecha de la misma, lo que evitaría varios trámites procesales posteriores.

Solicita se tenga presente que el art. 609 del Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán no indica un plazo expreso para la presentación de la liquidación posterior a la sentencia. Ello, en consonancia con el art. 669 del mismo digesto que indica: "Pagado el precio se mandará hacer liquidación del capital, intereses y costas.". De allí que concluye que no hay un plazo determinado, pero si existe la posibilidad de que se mande a hacer esa liquidación lo que no sucedió en autos.

Tilda de sorpresivo el decreto impugnado en tanto modifica una sentencia sin siquiera una intimación previa. Entiende que de este modo se vulneran derechos constitucionales tales como la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad y el debido proceso, además de asumir el rol de legislador al aplicar normas inexistentes al proceso modificándolo en perjuicio del acreedor y beneficiando a quien nunca se presentó en el proceso. Explica que al dictar sentencia quedó determinada la deuda e indicado el modo como debía actualizarse hasta el real y efectivo pago, lo cual hasta la fecha no se hizo, sin que ello sea atribuible a su mandante.

Finalmente indica que violenta el ejercicio de la profesión de abogado, al indicar o dejando entrever alguna falta de buena fe procesal, siendo que el letrado es sumamente respetuoso de las instituciones y de las normativas aplicables, lo que trae aparejado gravedad institucional.

Como antecedente favorable a su pretensión, cita la sentencia dictada en fecha 21 de marzo de 2025 en los autos caratulados: CREDIL S.R.L c/ Alderete Lucrecia Gladys s/ cobro ejecutivo Expte n.º 475/24, que tramitan por ante este juzgado, en los cuales se acogió favorablemente el recurso de revocatoria formulado por su parte.

Por todo lo expuesto, solicita se revoque por contrario imperio el decreto atacado, caso contrario se eleve a la Excma. Cámara a los efectos de resolver la apelación en subsidio que interpone. Los autos pasan a despacho para resolver (SAE 04/08/25).

CONSIDERANDO

La cuestión a dirimir radica en determinar si corresponde revocar la providencia del 26 de agosto del corriente año en cuanto dispuso "1) De las constancias de autos surge que el solicitante percibió la totalidad del monto condenado en la sentencia de fecha 15/06/2023 (\$71.460) con la orden de pago de fecha 21/09/2023. No pudiendo imputarse a la parte demandada la demora en la confección de la planilla por parte del solicitante -conforme el principio de buena fe procesal-; se observa la misma, debiendo practicarse una nueva liquidación desde la fecha de mora hasta la fecha 21/09/2023. 2) En cumplimiento con lo normado por el art. 609 del CPCyC, por Secretaría practíquese planilla fiscal a cargo del condenado en costas. Cumplido, vuelvan los autos a proveer lo peticionado en relación a la planilla de actualización honorarios presentada".

El recurso de revocatoria tiene por objeto que el juez o tribunal que haya dictado una resolución sin sustanciación previa, la revoque o modifique por contrario imperio, conforme lo dispuesto en el

artículo 757 del Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán.

En ese marco, debe señalarse que el recurso es formalmente admisible, en tanto fue deducido dentro del plazo legal de cinco días contados desde la notificación de la providencia impugnada (cfr. depósito de fecha 05/09/2025) y en contra de una resolución que fue dictada sin previa sustanciación, cumpliendo así con los requisitos previstos por los artículos 757 y 758 del Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán (Ley 9531).

Sentado ello, corresponde repasar brevemente las constancias del expediente que incidirán en su solución.

Mediante sentencia de fecha 15 de junio del año 2023 se hizo lugar a la demanda por \$71.460 más intereses pactados en el documento base de la acción, siempre que no superen el interés de la tasa activa que cobra el B.N.A. para las operaciones de descuento de documentos a 30 días, desde la mora hasta su efectivo pago. En esa oportunidad, se regularon también los honorarios del letrado Jorge Chehín en la suma de \$155.000.

En fecha 11 de septiembre del año 2023 se ordenó trabar embargo sobre los haberes del demandado hasta cubrir \$155.000 más \$77.500 (acrecidas) en concepto de honorarios regulados.

En fecha 21 de septiembre de 2023 se dispuso el pago -mediante transferencia bancaria- a la actora por la suma de \$71.460 en concepto de capital y se estableció que "existiendo fondos disponibles, practique planilla en el término de cinco días para futura extracción".

En fechas 22 de noviembre de 2023 se ordenó el pago al letrado Chein por la suma de \$35.114,55 en concepto de honorarios y \$8.015,28 correspondiente al 21% del IVA.

Luego de la paralización del expediente, con la última fecha de movimiento el 30/11/23 (cfr. SAE), los autos regresan al estado "en trámite" el 03/06/25.

En fechas 17/06/25, 23/07/25 y 18/08/25 se ordenó al Banco Macro S.A que transfiera las sumas de \$64.481,77, \$33.365,33 y \$9.638,36 en concepto de pago total de los honorarios regulados a otra cuenta del Banco del Sol de titularidad del Dr. Jorge Chein con más el porcentaje pertinente de aportes previsionales.

En fecha 21/08/2025 el nombrado presentó planilla de actualización de capital por \$201.121,43. Tomó como fecha de mora el 09/07/21, como fecha de pago el 21/09/23, y aplicó la tasa de interés del 152,72% (\$109.130,85) lo que arrojó un total de \$180.590,85. Dedujo el monto percibido (\$71.460) y obtuvo un saldo de \$109.130,85. A dicho monto lo actualizó desde el 21/09/23 al 31/07/25 (\$91.990,58) lo que le dio un total de \$201.121,43 Complementariamente reclamó gastos de juicio por \$7.783,6, ascendiendo el total de la planilla a \$208.905,03.

Esta planilla motivó el decreto en crisis y, en consecuencia, la revocatoria que nos ocupa.

Del análisis integral de las constancias de autos surge que la situación presentada en este juicio difiere respecto del caso que se citó como antecedente caratulado: "CREDIL S.R.L c/ Alderete Lucrecia Gladys s/ cobro ejecutivo Expte n.º 475/24". En dicho precedente, mediante sentencia dictada en fecha 21 de marzo de 2025, se acogió el reclamo del actor considerando que si bien la norma del Art. 609 del CPCCT no indica un plazo expreso para la presentación de la liquidación posterior a la sentencia, el tiempo allí transcurrido de 4 (cuatro) meses no aparecía como irrazonable ni lesivo de los principios de celeridad, economía procesal y concentración de etapas (artículo XII CPCCT).

A diferencia de aquel antecedente, en el caso de autos, por el contrario, sí existió un decreto de fecha 21/09/2023, mediante el cual se dispuso expresamente: “existiendo fondos disponibles, practique planilla en el término de cinco (5) días para futura extracción”. Dicha providencia fue notificada y no fue recurrida, por lo que quedó firme y las partes están alcanzadas por sus efectos.

En este sentido, resulta relevante destacar que entre la providencia de fecha 21/09/2023 –en la que expresamente se dispuso que, existiendo fondos disponibles, se practique planilla en el término de cinco (5) días– y la presentación efectuada por la actora el 21/08/2025, transcurrió un lapso de casi 2 (dos) años que luce excesivo, más aún si se considera que el expediente permaneció paralizado desde el 30/11/2023 hasta el 03/06/2025 (cfr SAE).

Cabe tener presente que el Principio IX de impulso procesal consagrado por el Código Procesal vigente, en concordancia con el artículo 125 del mismo cuerpo normativo, faculta a los jueces a adoptar todas las medidas necesarias para lograr la mayor celeridad y economía en el desarrollo del proceso. Y ha sido precisamente, en ejercicio de esta atribución legal, fue que se dispuso el otorgamiento de un plazo para practicar planilla.

Por otra parte cabe recordar que la conclusión de los procesos en un tiempo razonable –lo que incluye la etapa de ejecución de las sentencias– sobrepasa el interés particular de las partes, en tanto constituye un imperativo convencional exigible a los jueces, conforme lo establecido por el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Otro argumento de peso que sostiene el criterio hasta aquí expuesto está relacionado con la prohibición de agravar el daño y velar por el ejercicio regular de los derechos (arts. 10 y 1710 inc. c del CCyC) (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata in re: Riccio Patricia Beatriz y otro c/ Santillán Rosa Inés y otro/a s/ cobro ejecutivo de alquileres. Causa N° 122661, Sentencia de fecha 30/05/23).

En igual línea, la facultad de los jueces para otorgar el plazo de cinco días a fin de practicar la liquidación encuentra sustento en lo dispuesto por el artículo 771 del Código Civil y Comercial de la Nación. Esta norma autoriza expresamente al juez a reducir los intereses cuando la tasa pactada, o el resultado de su capitalización, excede sin justificación y desproporcionadamente el costo medio del dinero para operaciones similares en el lugar donde se contrajo la obligación. Esta previsión normativa pone en manos de los magistrados herramientas de control razonable sobre los efectos patrimoniales derivados del crédito, evitando distorsiones que puedan surgir por el mero transcurso del tiempo.

A su vez, el principio XII de celeridad y concentración procesal, contenido en el Título Preliminar del Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán, impone que los actos procesales deben realizarse sin demoras, procurando la concentración de la mayor cantidad de diligencias en un mismo acto. Esta disposición no sólo promueve la economía procesal, sino que es una garantía concreta de tutela judicial efectiva, orientada a evitar dilaciones innecesarias.

A mayor abundamiento, como ya he señalado en el antecedente citado “CREDIL S.R.L c/ Alderete”, el objetivo de la etapa de ejecución de sentencia es el cumplimiento efectivo y expedito del fallo dictado, sin que ello implique que una de las partes pueda extender la tramitación del proceso. En este orden de ideas, el espíritu del ordenamiento procesal impone la necesidad de que los litigantes actúen con prontitud en el cumplimiento de sus cargas procesales, entre ellas, la de confeccionar la liquidación correspondiente dentro de un plazo razonable.

En mérito a lo considerado, no se advierte en el decreto impugnado la existencia de un error de razonamiento o "in iudicando" que habilite su revocación por contrario imperio, por lo que el recurso de revocatoria debe ser rechazado.

Asimismo, corresponde conceder en relación y con efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto en subsidio, en mérito a lo considerado, sirviendo el escrito de revocatoria como expresión de agravios. En consecuencia, elévense los autos a la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones, Sala que por turno corresponda, sirviendo la presente de atenta nota de estilo.

Por ello;

RESUELVO

I.- RECHAZAR el recurso de revocatoria formulado por la parte actora contra el proveído de fecha 26 de agosto de 2025, conforme lo considerado

II.- CONCEDER en relación y con efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto en subsidio, en mérito a lo considerado, sirviendo el escrito de revocatoria como expresión de agravios. En consecuencia, elévense los autos a la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones, Sala que por turno corresponda, sirviendo la presente de atenta nota de estilo.

HAGASE SABER

MARÍA DEL ROSARIO ARIAS GOMEZ

JUEZA

Actuación firmada en fecha 30/09/2025

Certificado digital:
CN=ARIAS GÓMEZ María Del Rosario, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 27239533308

La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial del Poder Judicial de Tucumán <https://www.justucuman.gov.ar>.



<https://expediente-virtual.justucuman.gov.ar/expedientes/cd8e54e0-9d35-11f0-a077-0523e3f478bf>